**ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES
DEL JUICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL VENEZOLANO VIGENTE.***

PROF. ALBERTO BAUMEISTER TOLEDO

* Congreso de Derecho Procesal Civil patrocinado por el Instituto de Estudios Procesales José Rodríguez U. Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui, 23 Octubre 1998. Publicado en *Revista de la Facultad de Derecho*, Universidad Católica Andrés Bello, No. 54, Caracas 1999, pp. 127-154.

INTRODUCCIÓN

El tema que he escogido para esta disertación, que no pasa de ser una conducción a todos Uds. para analizar algunos de los problemas procesales de este procedimiento especial, está limitado precisamente al análisis de las particularidades más resaltantes de nuestro juicio de cuentas, en su versión como procedimiento ejecutivo especial, también conocido como juicio de ejecutivo de cuentas o procedimiento ejecutivo de rendición de cuentas.

No entraré a profundizar en los aspectos sustantivos del objeto de la pretensión sino en lo que resulte estrictamente indispensable, ni dirigiré mi atención a la segunda etapa de ese procedimiento especial, en tanto que, como todos lo sabemos, ella se desarrolla bajo los principios que regulan el juicio ordinario, y con la sola particularidad de los problemas que atañen a la naturaleza de las “observaciones a las cuentas” y a la especial prueba de experticia a que alude la Ley para resolver esas diferencias.

I. AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y MECANISMOS ADJETIVOS PARA PROTEGER ESE DERECHO DEBER

– Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la obligación de rendir cuentas:

Comenzaremos por indicar que el derecho a recibir cuentas y su deber correlativo de presentar dichas cuentas, deviene de fuentes diversas: unas, contractuales, otras cuasi contractuales (gestión de negocios) y otras, de un imperativo legal impuesto con ocasión del desempeño o

ejercicio de una determinada actividad, en la cual por las particularidades que supone el que con ella se hace entrega de bienes con un fin específico, y por entrañar que de ello uno de los sujetos de relación viene vinculado a dichos bienes de modo especial (y eso es también sustento de las anteriores relaciones de la que deviene), la ley le impone el deber de presentar un resultado de esa gestión y la obligación de restituir parte o todos esos bienes o el saldo de ellos.

Precisa observar como bien lo apuntó fallo de la Corte Suprema de Justicia Colombiana¹: “La obligación de rendir cuentas la establece la ley civil respecto de aquellas personas que sin tener ánimo de dueños administran bienes ajenos, bien por convención, como acontece respecto del mandatario; bien por cuasi contrato, como en la agencia oficiosa (*sic* gestión de negocios); bien por disposición de la ley, como en lo que respecta a los guardadores y a los ejecutores testamentarios (*sic* albaceas) pero la ley no impone la obligación a quien ha usufructuado una cosa por su cuenta creyéndose dueño de ella”.

Con esa misma fundamentación, podemos recomendar como concepto sobre la Rendición de Cuentas, entre otras, una definición descriptiva como la que nos hace Palacio², “Denominase rendición de cuentas, en general, a la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero y en cuya virtud debe suministrar a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo, eventualmente, el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor”.

Precisa advertir del anterior concepto, que no necesariamente tiene que tratarse de negocios ajenos o de un tercero, pues por ejemplo modernamente cada vez más se entiende que en el comercio, la obligación de rendir cuentas en las operaciones de esa índole, es una obligación profesional típica de la actividad, diferente inclusive de la que deriva del mandato o la gestión de negocios³.

¹ Francisco Morales Casas, *La Rendición de Cuentas*, Edit. Temis, Colombia, 1984, p.14, S. Dic. 1923.

² Lino Enrique Palacio, *Derecho Procesal Civil*, Edit. Abeledo Perrot, Argentina, 1983, Tomo VI, p 256.

³ Palacio, *opus cit.* p. 256, nota b.

Finalmente, nada obsta para que por igual se entienda existe esa especial obligación aún tratándose de negocios donde existan intereses propios del gestor o administrador.

En todo caso en tales supuestos se exige del sujeto obligado a las cuentas, haber desplegado una conducta diligente en el cuidado y manejo de los bienes y haberes que se le tienen confiados, su destino, manejo de sus frutos civiles o naturales, y la debida imputación que se haya hecho con los mismos.

Lo común y genérico en todos los supuestos resultará ser que en cabeza del sujeto activo de la obligación está latente el derecho a recibir detalle de cómo, cuándo y para qué se usaron y destinaron los mismos, y el derecho a recibir el saldo de aquellos si lo hubiere y del deber del sujeto pasivo de llevar un control razonable de las actividades cumplidas con los mismos, su destino, monto y el devolver o reintegrar los que queden al final de la ejecución de la actividad o negocio realizado.

Es de observar también que para que surja esa obligación de rendir cuentas, debe tratarse necesariamente de que con ocasión al ejercicio de las actividades convenidas, se hayan entregado o recibido bienes (dineros u objetos) con y para un destino específico, no bastando pura y simplemente que conlleven la ejecución o realización de conductas (hacer o no hacer), pues la omisión o indebida ejecución de las mismas, si bien pueden dar lugar al cumplimiento o incumplimiento de un contrato, cuasicontrato, o las responsabilidades derivadas de una imposición legal, y que a la larga pueden derivar en una obligación de resarcir daños, no comporta ese deber de dar detalle sobre cómo, cuándo y cuales resultados se obtuvieron en la realización de esas conductas.

Por lo demás, debe observarse también que en sí, tal derecho y deber, resultan obligaciones dependientes que no accesorias de otras principales, cuya vida y acontecer son totalmente independientes de las segundas, que entonces deviene derivada de estas y la que por ello en decir de la doctrina subsisten independientemente de ellas y no son simplemente accesorias.

Como lo destaca Morales Casas, debe quedar claro que “la rendición de cuentas no nace por virtud de un contrato típico de rendición de

cuentas, que no existe, sino como una obligación derivada, propia de algún contrato, como el de mandato, o de fiducia, u otro”⁴.

La titularidad para exigir cuentas, continúa el mentado autor, nace dentro de un conjunto de obligaciones típicas, y no como una obligación aislada. Esto es, se es titular del derecho de exigir cuentas no aisladamente, sino sólo en la medida en que existan otras obligaciones (ordinariamente de hacer)⁵.

Tampoco puede sostenerse que tiene origen directo en el cuasi contrato de la cual deviene o del imperativo legal que la impone. En todos los casos, la verdad es que ella es consecuencia de que el obligado haya realizado la administración de determinados bienes, ello es verdaderamente su causa eficiente. Esa tarea en sí misma es un fenómeno jurídico, el cual genera objetivamente la obligación de rendir cuentas.

Lo dicho tiene particular relevancia si se piensa que por ejemplo, celebrado un contrato de administración delegada para una construcción determinada, entregado como fuere con ocasión de ello sumas de dinero destinadas a adquirir materiales para la obra y para la ejecución de los trabajos que aquella supone, si se declarare la nulidad del citado contrato principal, por igual el sujeto obligado (administrador), deberá no obstante entregar o bien el monto íntegro de lo recibido, o sus saldos, con detalle de cómo, cuándo y para qué destinó lo percibido⁶.

La protección adjetiva prevista por la Ley en garantía del cumplimiento de ese derecho y la carga del deber que comporta, como en todo caso, la encontrará el sujeto de la relación sustancial en la variada gama de garantías jurisdiccionales contempladas en el ordenamiento que le garantizan la exigibilidad de su derecho a pedir el cumplimiento del contrato, a que se declare con fuerza de verdad, a falta de otro mecanismo, la existencia o inexistencia de una prestación o derecho derivado de esa relación, y a la condena del pago eventual de sumas adeudadas con relación a dicho convenio.

Siendo, como puede serlo una de ellas, por razón de las prestaciones a que se obligaron las partes, la indicada “dependiente” de rendir la cuenta del destino de bienes o dinero entregado con ocasión de aquel

⁴ Morales, *opus cit.* p.17.

⁵ *Cfr.* Morales, p. 18.

⁶ Morales, *opus cit.* p. 19.

acuerdo de voluntades, el acreedor de la obligación a recibir el informe del manejo de esos bienes, tendrá derecho de accionar ante el órgano jurisdiccional para garantía de ese débito, por la vía ordinaria ante el órgano jurisdiccional, y como en cualquier otro supuesto en el que se discuta la ejecución no voluntaria de una obligación.

Pero en adición a esa vía procesal ordinaria, también el ordenamiento admite el carácter incidental con la cual en veces aparece el deber de cumplimiento de esa obligación especial, sin que deba iniciarse separadamente el juicio ordinario, tal como ocurre en los casos en que el Depositario Judicial viene obligado a hacerlo, dentro del decurso de otro juicio y con ocasión de la que él rinda voluntariamente, le sea solicitada por la parte que dio lugar a la medida cautelar o ejecutiva, o finalmente le requiera el Juez, como rector del proceso y responsable de la actividad de dicho auxiliar de justicia⁷.

En el caso del Depositario Judicial, la Ley especial⁸ regula dicho procedimiento como una incidencia con particularidades muy especiales que a su vez se apartan tanto del juicio ordinario como de otros supuestos en que la Ley consagra la protección adjetiva del derecho deber a pedir y dar las cuentas.

Resumidamente, la normativa contempla que la pretensión se inicie con la simple cuenta que presenta el obligado y la petición de que se la imponga al obligado a pagar los emolumentos y gastos del depósito, para lo cual fija además una especie de término de caducidad que se cuenta a partir de haber terminado su gestión como depositario, y a fin de que quien venga obligado a pagarlas, la objete o no en el término de diez días y en el entendido de que si no fuere objetada dentro de él, la misma quedará firme y con fuerza de sentencia ejecutoriada.

⁷ En doctrina nacional y extranjera se admite por igual dicho proceso incidental de cuentas, si bien se lo refiere a supuestos que dan lugar a la misma diferentes al que es objeto de comentarios. *Vid.* Palacio, *opus cit.* p. 276 y dentro de los autores patrios, así lo acepta Arminio Borjas, *Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano*, Tomo VI, p.41, Editorial Biblioamericana, Argentina, 1947.

Finalmente debemos destacar que es esta también una posición que encuentra respaldo jurisprudencial en decisiones de nuestra CSJ, cual es el caso de la Sent. fechada el 21-11-96 transcrita en Henríquez La Roche, *Código de Procedimiento Civil*, tomo V, Edit. Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Caracas, 1998, p. 205.

⁸ “Ley de Depósito Judicial”, GO. 28.213 del 16-12-1966, arts.13 ss.

Si por el contrario la cuenta se objetare, se abrirá una incidencia probatoria de ocho días en el juicio ordinario y de cuatro si el proceso en la cual se insertare fuere breve, debiendo resolverse la incidencia en única instancia, pero pudiendo cualquiera de las partes pedir que la sentencia lo sea con Asociados.

Como se advierte, este extraño procedimiento pareciera gozar de las características de los procesos ejecutivos, pero como se lo observa no se exige la preexistencia del título típico que de costumbre suele ser exigido por la Ley en estos casos (*vid infra*), y en adición, lo que de no quedar contradicho sirve de sentencia, no es el auto del Tribunal que ordene darle trámite al procedimiento incidental, sino a “la cuenta presentada por el depositario”, lo que ciertamente es un verdadero caso extraño en nuestra normativa vigente, y del cual francamente tampoco hemos encontrado similitud en otros ordenamientos.

La única razón que podemos dar para sustentar tan extraña concepción de ese proceso, lo es que se supone que los gastos y emolumentos del depositario, viene a su vez regulados en la Ley, y por tanto asumimos que el Legislador debió presumir que los mismos al no ser objetos se conforman con los del ordenamiento, y de allí que simplemente los declare líquidos y exigibles.

Pensamos que salvo el indicado caso no existen en nuestro ordenamiento otros similares en que la cuenta pueda ser presentada y/o exigida incidentalmente, pues si bien en materia de tutela⁹ se prescribe la obligación y se alude a que el Tutor deberá rendir las cuentas de su gestión, y en tanto el procedimiento de tutela permanece en el tiempo abierto, nada lleva a concebir que aquellas deban presentarse incidentalmente, sino por el contrario a que se las exija o se las rinda conforme a las reglas generales a que venimos haciendo referencia en este capítulo. Por supuesto que el Cpc nada estatuye tampoco al respecto dentro de los procedimientos especiales de familia (Arts. 726 ss).

En otras ocasiones así mismo podremos observar que quien puede pedir en acción de declaración de condena, y ante la ausencia de una norma sustantiva que regule el supuesto, lo será quien por Ley, contrato

⁹ Arts. 376 ss, “Código Civil”, GO 2990 Ext del 26-7-82 (en lo sucesivo Cc).

o cuasicontrato, venga obligado a rendirlas, para que “le sea recibida y aprobada la cuenta”¹⁰.

En tales supuestos obviamente, la acción deberá tramitarse y sustanciarse por las vías del juicio ordinario, con todas las garantías de la Ley para las partes.

Finalmente, el ordenamiento adjetivo regula otra forma más para exigir el cumplimiento del deber de rendir cuenta, y para el cual establece determinados requisitos, nos referimos ahora al propiamente dicho “procedimiento ejecutivo de rendición de cuentas”.

En este caso, el presupuesto básico para la procedencia de la garantía jurisdiccional es el de la existencia de una prueba calificada (documento auténtico) del que pueda deducirse presuntivamente y de modo cierto que existe la obligación de rendir las cuentas, de que se ejerció la actividad, y de que se lo hizo en relación o uno o más negocios determinados, esto es, no solo de que existe el supuesto genérico para rendir la cuenta, derivado de la existencia de una relación jurídica en la que se supone existe ese deber de administrar bienes, sino de que efectivamente se lo realizó en una determinada época y para uno o más negocios específicos, o bien que se encuentra en un supuesto legal que le impone esa obligación, y en adición a que efectivamente lo ejecutó en un tiempo dado y con ocasión de determinadas operaciones.

Como lo dejamos ver, de la prueba, o documentos que se consiguen parece no ser suficiente que solo evidencien la existencia del derecho deber de rendir la cuenta, sino por igual se entienda y comprenda el haber ejercido la actividad de administración durante un cierto período definido, y que en realidad realizó el o los negocios para los cuales se contemplaba la entrega de esos bienes, o el recibo de los mismos¹¹.

¹⁰ En legislaciones foráneas, como es el caso de Argentina, se contempla en norma expresa tal derecho, Art 657 Código Procesal de la Nación. *Vid.* Palacio, *opus cit.* p. 278, procedimiento que se denomina “Demanda por aprobación de cuentas”. Borjas, *opus cit.* p. 41, por igual admite la posibilidad de dicha acción, sin cita de fuente legal.

¹¹ Nuestra jurisprudencia no es muy clara respecto a que debe entenderse por “auténtico” y ha sido vacilante al respecto, sin embargo hoy, puede decirse que la tesis dominante es la de reputar tal prueba escrita de fecha cierta y paternidad indubitable. Sobre el concepto de auténtico, en su problemática procesal remitimos a los interesados a los enjundiosos estudios de los profesores Brewer-Carías, Rengel Romberg y Cabrera Romero. En adición, la norma tampoco es del todo clara y parece que el requisito abarca no sólo al documento del cual derive la obligación de la rendición de cuentas (el contrato: mandato, cuentas en participación,

En estos casos, el ordenamiento adjetivo no es que le quita al sujeto con derecho a recibir las cuentas la acción para pedir las en vía ordinaria, sino que le facilita, en forma optativa a la vía ordinaria, mas no concurrente con ella, otra vía más expedita para lograr la presentación de las cuentas y por tanto que antes que nada quede garantizado el cumplimiento de ese débito, a través de medios ágiles, dotados de especial celeridad que conducen al mismo efecto.

Tales mecanismos procesales constituyen el procedimiento ejecutivo especial de rendición de cuentas y es en este que centraremos nuestros comentarios.

En resumen, quien tiene el derecho a que se le presenten cuentas, puede lograrlo bien a través del proceso ordinario, con todas las garantías del proceso, mediante el ejercicio de una acción de condena, cuyo resultado será que el demandado, obligado a rendirlas, se le tenga por tal, y que como consecuencia de las declaraciones de certeza previas en el proceso, venga obligado a devolver determinados bienes, o su equivalente en dinero, con cualesquiera otras peticiones accesorias: daños, intereses, costas, etc., bien por una vía incidental en ciertos casos contemplados en la Ley, y dentro del decurso de otro juicio, como incidencia autónoma.

Finalmente, si cuenta con los medios probatorios calificados por la Ley, que le permitan deducir al órgano judicial la existencia presuntivamente indiscutible del deber de rendir las cuentas, la normativa adjetiva pone a su disposición la vía de un proceso ejecutivo especial, en el cual, constatado sumariamente por el juez, con la minuciosa revisión del medio probatorio y la convicción que en el produzca de la existencia del débito de rendir cuenta, del efectivo ejercicio de las actividades que comporta la administración o manejo de bienes o dinero, derivados de uno o más negocios determinados en un período de tiempo, sea compe-

comisión, etc.) sino a los demás extremos a que alude la norma: la duración del ejercicio de la actividad, el o los negocios involucrados. Nuestra Corte Suprema ha sostenido: “no basta la simple demostración del título o carácter conferido al demandado para administrar negocios ajenos, como lo sostiene la formalización, sino que es necesario, conforme a nuestra pacífica doctrina, que se evidencie de autos la efectividad de la administración o gestión cumplida por el cuentadante dentro del lapso en que pudo ejercer las facultades pertinentes”. Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sent. 16-6-76, *Repertorio Forense* 3530, pp 1 ss, *cit.* por Henríquez La Roche, *opus cit.* p.203.

lido en un breve lapso, sin necesidad de que transcurra todo un período para la formación de esa convicción (el del juicio ordinario), para que las presente, y seguidamente se abra un término especial judicial, en el cual se analicen, se objeten, y en su caso por la vía de una experticia, se determine si están o no conformes, y con vista a ello, se concluya si existe o no la obligación de reembolsar un saldo de bienes o dinero, derivado del negocio mismo o del indebido manejo de dichos negocios, para que resulte condenado a pagar ese saldo judicialmente determinado.

Para buscar de alguna manera justificación a la especial concesión que hace el legislador a esta obligación, y para lo cual contempla esa vía “ ejecutiva “ para exigir su cumplimiento, podemos argüir, que se lo hace en consideración a que el deber mismo de rendir cuenta se sobrepone a toda incidencia misma relativa a la vida de la relación negocial o del deber legal del cual deriva, y de sus resultados (que existan o no saldos acreedores) si queda demostrado presuntivamente y con un medio de prueba calificado que él existe, que efectivamente se cumplió la labor o gestión que genera ese débito obligacional durante un cierto período y actividad, independientemente de cualquier defensa o reclamo derivado del contrato o relación legal subyacente, debe acatarse ese débito u obligación de presentar la cuenta.

– **Relaciones jurídicas tipo de las cuales nace la obligación de rendir cuentas:**

Precisadas así las cosas, merece la pena referirnos o catalogar aquellos casos en que la voluntad de las partes, la Ley o el cuasi contrato hacen nacer la obligación derivada de rendir cuentas, con la observación, de que ellos no son los únicos, puede ocurrir que con ocasión del desarrollo de otro contrato típico o atípico y por razón de esa especial gestión de administración de bienes que con relación a aquél pueda surgir, nazca también la comentada obligación.

En cuanto a la fuente contractual, pueden citarse entre, otras de las cuales deriva el deber, en el contrato de sociedad en cuanto a sus administradores, con la advertencia de que algunos entienden que la legitimación activa para exigirla durante la vigencia ordinaria de la sociedad corresponde a la asamblea, y durante la etapa de liquidación a los socios, a los liquidadores de las sociedades, independientemente de que

hayan sido o no sus administradores, a los Síndicos en las quiebras, en las cuentas de participación mercantiles al asociante y más propiamente al que actúa como gestor, en el mandato al mandatario e incluyendo al factor mercantil, en el de corretaje de seguros, en el de fideicomiso, en el contrato de edición, en la venta por consignación de mercancías (conocido en algunas legislaciones como “estimatorio”). Precisa destacar, repetimos que no es la anterior enumeración taxativa, y que en otros muchos contratos, típicos o atípicos, puede surgir la obligación, si de alguna manera una de sus partes asume esa función de administración de bienes vinculados al mismo (pe. en el de prenda, en el de Depósito especial <Almacenes de depósito>), etc.

Es importante destacar que uniformemente en cambio, no se admite que nace tal obligación en el contrato de cuenta corriente bancaria, regido por legislación y principios especiales.

Respecto a la fuente legal de la obligación, pueden citarse entre otros, por igual, los casos entre el cónyuge administrador por la administración de los bienes comunes, la de los padres por los bienes propios de sus hijos, el de los tutores y curadores, del albacea testamentario, el administrador de bienes del ausente, el curador de la herencia yacente, los administradores especiales de la herencias, los depositarios judiciales, los administradores *ad hoc* en el caso de medidas innominadas, etc.

Finalmente, con origen en el cuasi contrato, se mencionan igualmente como fuentes del derecho deber de entregar y recibir cuentas, entre otros los casos del gestor de negocios, el de los administradores de la sociedad de hecho o de la irregular, la de los comuneros que gestionan la administración de la cosa común, etc.

Precisa también destacar, que salvo los casos en que la obligación tiene origen legal¹², es perfectamente posible que voluntariamente se dispense de la obligación de rendir cuenta al cuenta dante por el cuenta habiente, admitiéndose que dicha renuncia pueda ser inclusive tácita¹³.

¹² Salvo el caso del curador de bienes designado en testamento para un menor o entredicho ex art. 311 del Código Civil, (Cc) GO. Ext 2990 del 26-7-82.

¹³ Palacio, *opus cit.* p. 258. Respecto a la renuncia, la doctrina entiende que en tal caso debe entenderse se trata de una liberalidad y por tanto deberá atenderse en tales supuestos a determinar si el renunciante tiene o no la capacidad para hacer liberalidades y si el cuentadante tiene la propia para recibir aquellas. Cf. Palacio misma página.

Finalmente debe señalarse que existirán casos en los cuales la gestión administrativa de los bienes o haberes esté confiada por la Ley o el contrato, o inclusive de hecho a más de una persona, supuestos en los que obviamente, vienen obligados a cuenta, solidariamente, a los que así deben hacerlo y que efectivamente la hayan ejercido, produciéndose los efectos de un litisconsorcio.

Todo lo anteriormente expresado reviste particular importancia en tanto, que de ello deviene la cualidad pasiva o activa para intentar o soportar los efectos de los correspondientes procesos de rendición de cuentas, debiendo por último resaltar que por igual en veces resultará inocuo que el derecho habiente a la cuenta no resulte ser o estar colocado en la posición sustancial de titular de la propiedad de los bienes o haberes entregados en administración, pues puede serlo, con derecho a pedir las cuentas un tercero, que por cuenta de otro detenta tales bienes¹⁴.

II. LA ESPECIALIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Este procedimiento ejecutivo de rendición de cuentas está contemplado en nuestro Código de Procedimiento Civil vigente en los artículos del 673 al 689 en el Libro Cuarto, De los Procedimientos Especiales, Parte Primera, De los Procedimientos Contenciosos, Título II, De los Juicios Ejecutivos¹⁵, resulta ser de vieja data en nuestra normativa procesal, en términos más o menos parecidos se lo contempla en otras legislaciones y tiene sus orígenes según algunos en el procedimiento romano de la "*reditio rationum*"¹⁶.

Como proceso especial, tiene determinadas características peculiares, que precisamente lo hacen apartarse de otros procedimientos especiales, y a su vez de los demás procedimientos ejecutivos y por ello reviste particular interés, en tanto representa una mezcla de situaciones

¹⁴ Borjas, *opus cit.* p. 40.

¹⁵ Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo Cpc), GO 3694 Ext. del 22 de enero de 1986 al cual se hicieron insignificantes reformas en el hoy vigente, GO 4196 Ext. del 2 de agosto de 1990.

¹⁶ Gabriella Rampazzi Gonnet, *Il Giudizio Civile di Rendiconto*, Edit. Giuffrè, Italia, 1991, p. 10.

sustantivas y procesales poco comunes en nuestro sistema, el cual se lo concibe así como un modo especial que regula el Legislador para garantía del cumplimiento de esa “obligación derivada” de otras nacidas en virtud de determinados contratos, cuasi contratos o de la Ley.

Una de esas particularidades es, en efecto y como lo veremos, el ejercicio acumulado de dos tipos de acciones autónomas, una, la pretensión meramente declarativa, dirigida a obtener el pronunciamiento del juez, sobre la pura obligación del demandado de que resulta ser sujeto de la obligación genérica de rendir cuentas y otra, subsiguiente y consecuencia de la anterior, que deviene en pretensión de condena, y que viene a generar eventualmente una obligación de restituir determinada suma de dinero o bienes, y que surgirá como resultado del examen y verificación de la entrega y presentación de los recaudos que origina la gestión de administración que fue invocada y sobre cuya existencia ha quedado presuntivamente demostrado ha sido cumplida y está referida a un período dado y a unos negocios determinados.

Como debe colegirse de lo antes expuesto, también cabe advertir que en este caso el “título fundamental de la pretensión” necesariamente debe acompañar al libelo de demanda, no pudiendo aceptarse inclusive siendo público el que lo sea, pueda presentarse dentro del lapso excepcional contemplado en la Ley, pues como requisito impretermitible de esa pretensión inyuntable de la primera etapa del juicio ejecutivo de cuentas, el Juez necesariamente tiene que revisar, analizar y deducir de dicho instrumento si se dan las excepcionales razones para poder admitir por esa vía la pretensión deducida.

Esa misma especial característica, hace que el desarrollo del procedimiento se cumpla también bajo condiciones particulares, pues como lo veremos, el mismo se cumple en dos etapas, claramente diversificadas, y con dos modalidades de procedimiento nítidamente definidas, una bajo la premisa de una cognición breve y sumaria, que concluye con el pronunciamiento de que existe en cabeza del llamado a juicio la obligación de presentar las cuentas, y de que por tanto soporta la condición de ser sujeto de una relación sustantiva que la genera (administrador de bienes, tutor, mandatario, gestor de negocios) que queda confirmada con la declaración de certeza inyuntable que le impone y le insta a presentarlas dentro del plazo que fija la Ley; y otra, que nace

como consecuencia de las objeciones que él puede presentar a la orden del juez de que así lo haga, que debe hacerla valer dentro del mismo plazo que se le ha fijado para presentarlas, so pena de que su actitud remisa o no ejercicio de defensas que la contradigan o nieguen, hagan quedar firmes y definitivas las declaraciones de certeza que en *in limine* contiene el Decreto inicial del órgano judicial, o que, formulada contra la misma, la pertinente contradicción (por vía de la oposición), hacen que deban ser discutidas en un proceso ordinario, al cual resulta condicionalmente llamado.

Derivado de esas notas especiales que rodean el proceso de rendición de cuentas ejecutivo, en su procedimiento se observan las siguientes particularidades:

1. En cuanto a la competencia del órgano judicial que conoce del mismo

En el caso de la rendición de cuentas, en general, y por igual en el supuesto particular del juicio ejecutivo de rendición de cuentas, para ciertos supuestos en que nace la obligación de darlas (en general en el supuesto de tutela y los de administraciones concedidas, entendiéndose por tal nosotros las que derivan de un supuesto legal, no de la voluntad de las partes), el Cpc establece como fuero electivo para el demandante, el del lugar donde se hayan conferido o se la haya ejercido, o el del domicilio del obligado, dejando a salvo, respecto a este último que fueren varios los demandados y no tuvieran el mismo domicilio (art. 43 *ejusdem*).

Borjas se plantea como caso curioso, cuando coinciden los fueros especiales del *forum apertae sucessionis* y el *gestae administrationis* (el de apertura de la sucesión y el del domicilio social) con el contemplado para la rendición de cuentas ex artículo 45), resolviendo el caso así: Si se trata de acciones principales de cuentas, predominarán los fueros especiales en cada caso, pues tal competencia no es potestativa, y si se tratase de un proceso incidental, obviamente atraerá el ejercicio de la nueva acción el del juicio principal ante el juez que esté conociendo del caso (partición o acción de origen societario)¹⁷.

¹⁷ Borjas, *opus cit.* p. 41.

En lo atinente a cuantía y materia son aplicables las normas generales de competencia establecidas en el Cpc y reglas especiales de distribución de las competencias.

Debe observarse que hoy, con las recientes medidas de distribución de competencias, estimamos que los casos de rendición de cuentas en procesos relacionados con familia y sucesiones, el competente para conocer de dichos juicios resultan ser los jueces de Bienes, que no los de familia y menores, aun cuando la obligación de rendir las cuentas surja de relaciones típicamente de Derecho de Familia o del Derecho de Menores o incapaces.

2. Título que se invoca como fundamento de la pretensión y documento fundamental de la demanda

Como ya lo esbozáramos precedentemente, es esta una de las particularidades especiales del juicio ejecutivo de rendición de cuentas.

En efecto, ya dijimos que de no existir esa especial prueba documental, el procedimiento no puede ser tramitado por la vía de cognición sumaria, o por la vía ejecutiva, que consagran al mismo.

Esa prueba auténtica exigida por la Ley, hace las veces del título ejecutivo que se requiere en procedimientos de esta naturaleza.

En efecto, como buena pretensión ejecutiva, la misma persigue modificar una situación de hecho existente en forma de adecuarla a una situación jurídica resultante sea de una sentencia condenatoria, sea de un documento que, en razón de su contenido, goza de una presunción favorable con respecto a la legitimidad del derecho del acreedor, con ella no se trata de obtener un pronunciamiento acerca de un derecho discutido, como ocurre en el proceso cognitivo ordinario o pleno, sino de actuar, de traducir en hechos reales un derecho, que pese a haber sido voluntariamente o legalmente reconocido o creado para ciertos acreedores quienes se confiere un poder de supremacía, permanece insatisfecho.

Por consiguiente, desde que en la base de toda pretensión ejecutiva se encuentra un derecho ya cierto o presumiblemente cierto, aquella reviste, desde el punto de vista de sus efectos, una característica que la distingue de la pretensión de un proceso de conocimiento.

Mientras en la última el efecto inmediato es que el sujeto contra quien se la dirige presente sus defensas, la pretensión ejecutiva incide o puede incidir en forma directa en la esfera patrimonial del deudor o provoca la adopción inmediata de medidas coactivas sobre bienes o conductas del sujeto pasivo de la relación procesal.

Los juicios ejecutivos para notable doctrina procesal, son y gozan de las características de los procesos de ejecución y no simplemente son de “conocimiento limitado”¹⁸.

La ley admite que en estos casos la tutela pueda concederse en virtud de una declaración de certeza que suple la voluntad del mismo deudor, la administración pública o la naturaleza de público del documento en la cual conste dicha declaración, se atribuye en estos casos un valor particular al documento, en cuanto tiene un determinado contenido del cual resulta que el acreedor, en virtud del mismo documento pueda dirigirse al Juez para obtener la tutela ejecutiva, sin necesidad de proveerse de una declaración autoritativa¹⁹.

Doctrinariamente se ha discutido si el título ejecutivo configura un acto o un documento. La primera postura defendida por Liebman, para quien el documento no es más que el aspecto formal del acto y este, en tanto tiene una eficacia constitutiva que consiste en otorgar vigor a la regla jurídica sancionatoria y en posibilitar la actuación de la sanción en el caso concreto crea una nueva situación de derecho procesal que no debe confundirse con la del derecho material preexistente entre las partes²⁰.

Carnelutti, en cambio, adhiriendo a la segunda tesis, sostiene que el título ejecutivo es un documento que representa una declaración imperativa del juez o de las partes y agrega que siendo tal declaración un acto, con el intercambio acostumbrado entre el continente y el contenido y, por tanto, entre el documento y el acto que en él está representado, se explica la costumbre corriente de considerar como título al acto en vez del documento²¹.

¹⁸ Palacio, *opus cit.* T. VII, p. 222.

¹⁹ Micheli, *Curso de Derecho Procesal Civil*, t.I, p. 32, Trad. S. Sentis.

²⁰ Citado por Palacio, *opus cit.* t. VII, p. 223.

²¹ Francesco Camelutti, *Instituciones del Proceso Civil*, 1.1, p. 269, Edit. Ejea Argentina.

Desde el punto de vista formal, el título ejecutivo, como documento que acredita la existencia de un acto jurídico determinado, es suficiente para que el acreedor, sin necesidad de invocar los fundamentos de su derecho, obtenga los efectos inmediatos que son propios a la interposición de la pretensión ejecutiva.

Desde el punto de vista sustancial, el acto constatado en el documento, le brinda al deudor la posibilidad de demostrar la falta de fundamento del derecho del acreedor, debiendo distinguirse según se trate de títulos ejecutivos judiciales o extrajudiciales, pues los segundos son susceptibles de perder eficacia en tanto en esa hipótesis como en la consistente en acreditarse, aunque en un proceso posterior a la ejecución, que el derecho del acreedor nunca existió, mientras que los primeros sólo son susceptibles de atacarse mediante la demostración de hechos posteriores a su creación²².

Lo dicho sobra para explicar el porqué, la pretensión ejecutiva de la rendición de cuenta debe y tiene que nacer con la invocación y consignación de un título especial, con tales características, esto es, auténtico, que debe ser examinado sumaria y brevemente por el Juez, a fin de precisar si de él deviene esa condición de cuenta dante del demandado, sea de origen contractual, cuasi contractual o de fuente legal, para aparejar esa orden de ejecución inmediata de que sea presentada la cuenta, sin recurrir al proceso de cognición pleno.

En este caso, como bien lo anota Borjas²³, con mas rigurosidad que en el resto de los juicios ejecutivos, el documento presentado con la pretensión, a pesar de que no siempre hace fe pública y puede ser apreciada soberanamente por el Juez, no es discutida en el debate probatorio de primera instancia sino cuando se le opone una prueba auténtica contraria, porque en todo otro caso, el demandado, que no puede promover contra ella sino las pruebas admisibles en alzada, como el recurso no le es oído sino en el efecto devolutivo, se ve obligado a rendir las cuentas en impretermisible acatamiento a una decisión sumaria, ejecutiva y peligrosa.

Dicho autor, que tilda no de equidad ni apegado a lo jurídico tal proceder legislativo, justifica el sacrificio de la justicia en tales casos,

²² Palacio, *opus cit.* p.225.

²³ *Opus cit.* P. 47.

para proteger la obligación contractual, cuasicontractual o legalmente contraída de presentar las cuentas, de cierto modo perjudicando así al reo e imponiéndole adelantar las pruebas con las cuales pretende contrarrestar las peticiones del actor, para que no queden burlados o pretermitidos sus deberes de entregar las cuentas.

Lo anterior es tan importante que el mismo Borjas admite que existiendo por ejemplo evidente falta de representación en el apoderado demandante, no podrá hacerse valer con éxito dicha defensa para enervar el mandato del Juez si no presenta la prueba auténtica que enerve el derecho demandado²⁴.

Nada dice Borjas, y por no tener modelo similar ninguna de las legislaciones extranjeras a nuestro alcance, queda sin justificar el enredoso texto de nuestra normativa, en cuanto a si el documento fundamental de la acción debe comprender por igual que de ellos se desprenda el efectivo ejercicio de la administración cuya cuenta se demanda y él o los negocios en los cuales se ejerció aquélla²⁵.

La apertura del procedimiento ejecutivo de cuentas, pues, supone la existencia de una presunción calificada de que existe la obligación de rendir esa cuenta, de que el demandado califica dentro de uno de los supuestos de los sujetos obligados a rendirla, que a tal efecto menciona la norma, a título enunciativo, y agrega la Ley, así como el período en que se le exige y debe presentarla y el negocio o negocios que debe comprender, y todo ello que conste de manera fehaciente, dimanante, de un medio o norma dispositiva que así lo consagre (de modo auténtico)²⁶.

3. Las dos etapas del juicio ejecutivo de rendición de cuentas

Todo lo antes dicho explicará entonces por qué entre las peculiaridades de este proceso, está su desarrollo previsto en dos etapas totalmente diversas y con fundamento a dos pretensiones acumuladas con efecto y objeto mediato diferente.

²⁴ Opus cit. P.46.

²⁵ Véanse los comentarios en nuestra nota 9 supra.

²⁶ “Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil de 1986”, en Conferencias sobre el nuevo Código de Procedimiento Civil, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1986, en lo sucesivo EMCPC.

La primera etapa, en la que al Juez sólo corresponde examinar, con vista al documento que se le consigna, si se dan esos elementos característicos del documento que apareja ejecución, y que se contrae en el mejor de los casos a que en efecto el demandado es cuenta dante por voluntad de un contrato, por la existencia de una relación de cuasi contrato o por imperio de la relación legal en el contenida, que deberá examinar cuidadosa y sumariamente él o los recaudos acompañados, y de encontrar que si llenan tales extremos le obligan a pronunciar a admitir esa acción especial y a pronunciar la orden de intimación para que comparezca el demandado a presentar la cuenta en el lapso que fija la Ley.

En este caso, la pretensión ejercida, lo es para que se constate que en efecto el llamado a juicio viene obligado a rendir las cuentas, por ese determinado período y en razón de haber ejecutado operaciones relacionadas con un determinado negocio, y constatado ello en un breve conocimiento, a través del examen de la prueba consignada, la orden de inyunción emanada del Tribunal se convierta en un procedimiento de mera declaración de certeza, de que ello es así, y con lo cual se satisface esa primera pretensión.

Ese mandato, como puede colegirse de la Ley, es condicional, pues el Juez lo emite, en tanto no se le demuestre tampoco con un medio calificado de prueba, de que tal pretensión no tiene sustento en derecho, como lo veremos, no solo por la demostración contraria a que no se era obligado a la cuenta, o que la misma no se corresponde con el período por el cual se la solicita, o que no lo es por los negocios en los que se afirma se motiva la misma, sino que por igual puede enervársela por cualquier otra defensa, como lo sería la existencia de cuestiones previas u otras defensas de fondo que atacaren el fundamento mismo de la pretensión (haberlas ya rendido, estar exento de presentarlas, haber prescrito el derecho a exigirlas, etc.), conforme a los cuales, darán derecho entonces al demandado a discutir en una incidencia probatoria el fundamento de sus razones, y para que luego el Juez, resuelva al fondo, ratificando o no entonces su mandato original de que las cuentas sean presentadas en la forma que lo exige la Ley.

Contra tal determinación preliminar, y ante la fuerza del documento consignado, solo admite recurso de apelación la Ley en el solo efecto devolutivo (Art. 674 Cpc).

Como lo esbozamos, durante ese término y dentro de esa misma primera etapa solo se permite al demandado para enervar esa disposición y dejarla sin efecto, de modo tal que no adquiera fuerza definitiva de cosa juzgada la orden de rendir las cuentas, el que haga oposición con fundamento a prueba escrita, de que las cuentas que se le piden ya fueron presentadas, o de que las mismas corresponden a un período diferente a aquél afirmado en el libelo por el actor, o que se corresponden con negocios diferentes a los que las imputa el demandante.

Si el intimado a cuentas no compareciere, o si haciéndolo no hubiere ejercido la oposición con fundamento a las prueba que le requiere la Ley, ni presentare las cuentas dentro del lapso indicado en el decreto inyuntivo, se tendrán por ciertas, la obligación de presentar las cuentas, el período por el cual las hubiere reclamado el actor y por los negocios a que en él se les impute, salvo que en el breve lapso de promoción de pruebas de cinco (5) días nada probare que le favoreciere (no importa con cual tipo de prueba), debiendo el juez, además, pronunciarse sobre la petición de condena acumulada de que fuere resarcido el demandante en los bienes y saldos reclamados como resultado de esa cuenta por el actor. De no haberse promovido pruebas en dicho término el Juez dictará sentencia definitiva, abarcando así las dos pretensiones deducidas en los quince días siguientes al vencimiento del mentado término probatorio.

Si se hubieren promovido pruebas, su evacuación deberá concluirse en los veinte días siguientes al de admisión de aquellas, debiendo sentenciar el juez en el quinceavo siguiente al de terminación del de evacuación, salvo que se promoviere la de experticia, en cuyo caso se procederá conforme lo prevenido en el Capítulo V, Título II del Libro Segundo y por igual se dictará sentencia en el mismo término indicado con las modificaciones que derivan de la indicada salvedad.

Igual procedimiento se seguirá en el supuesto de que el demandado no presentare las cuentas en el término fijado en el artículo 675 si la apelación hubiere sido desestimatoria (Art. 677 aparte final).

Como se observa, en todos los citados casos, el juicio especial en su fase primera quedará concluido, sin entrar a la segunda etapa, con la observación de que además habrá también el indicado pronunciamiento de condena, en ese abreviado término que se fija para la incidencia total del procedimiento.

En cambio, si se presentaren las cuentas, o bien se admitiere la oposición y se desecharen las defensas esgrimidas y desestimaren los alegatos que contradijeren la pretensión de fondo, y en consecuencia hubiere condena a rendirlas, se abre la segunda etapa del juicio especial, ahora plenario, contradictorio y con todo lo que supone el pleno proceso de cognición, a fin de que por igual se presenten las cuentas en la forma que indica la Ley, las cuales podrán ser objeto de examen y observaciones por parte del demandante, quien así mismo podrá optar por aprobarlas o en su caso objetarlas, total o parcialmente.

Precisa destacar, además, que la obligación de rendir cuentas se cumple presentándola en la forma que lo determina expresamente la Ley, que no a como le venga en ganas al llamado a juicio, y en esto es importante resaltar, que entregándolas en una forma que se separe a los parámetros establecidos por la Ley, no es que el juicio no prosiga en ésta etapa, ni que el Juez deberá pronunciarse como si se tratase de rebeldía, sino que conforme a la Ley (Art. 687) el actor deberá acudir a las vías de prueba de exhibición y de informe (436 y 433 Cpc) para que con vista a ello el Juez se forme criterio sobre cuales debieron ser los resultados de esa gestión y pronuncie su condena.

De lo dicho cabe destacar que en este supuesto consideramos que la Ley defiere al Juzgador el análisis a la conducta del obligado a presentar dichos documentos, para juzgar presuntivamente sobre los hechos que se tratan de demostrar, lo cual como sabemos ha sido recibido con reservas por la doctrina nacional y nuestra jurisprudencia, como medio de convicción, pero que para nosotros, tal mandato expreso, así permite sean aceptados en nuestro sistema probatorio.

En efecto, tratándose de una obligación de hacer, a la cual físicamente no puede ser compelido el demandado, la única forma en que la Ley adjetiva pueda garantizar el débito obligacional, es darle un sentido positivo a ese silencio u obstáculo para que se realice la prueba adecuada, y deducir, con los elementos que tenga en autos, la veracidad de las afirmaciones que haga el actor en su demanda, pues de lo contrario jamás podrá tener lugar la satisfacción de ese deber.

Para terminar, en cuanto a este aspecto se refiere, llamamos la atención de que en este proceso, y en el ordinario de cuentas, tiene particu-

lar importancia la forma del libelo, y el cumplimiento de las exigencias de la Ley y la prudencia, pues resalta como obvio la importancia de que en aquél se explanen, de la manera más perfecta y completa posible, que fue lo entregado, como se entiende debió ser imputado, que resultados resultan probados de las operaciones aludidas en el negocio, cuales son los eventuales saldos acreedores o deudores de dichas operaciones, o cuales los que normalmente se pueden esperar de negocios similares en el mercado, y finalmente, precisar con detalle y fundamento, cual sea el monto en que se deben estimar los saldos favorables al demandante.

Sólo así, y de la conducta contraria al deber de demostrar lo contrario por parte del obligado a cuentas, podrá el Juez deducir racionalmente, los efectos de las pruebas de exhibición y de informes, si de alguna manera resultare no rendida la cuenta en la forma que lo exige la Ley, o del entorpecimiento a presentar los recaudos y documentos que se hubieren solicitado en exhibición o por vía de informe, y valorando la conducta remisa del obligado.

En cambio, si se presentare la cuenta, en la forma prevenida por la Ley, y surgieren desavenencias en cuanto a monto, calidad de la prueba en cuanto a imputación de los haberes, etc., a falta de acuerdo respecto a los hechos a que den lugar las observaciones, se ordenará una prueba única de experticia, a la cual la doctrina le ha dado un carácter limitado y específico, pues es un “peritaje contable” puro y simple cuyo objeto será procurar desentrañar las divergencias y “presentarán la cuenta” conforme a sus conocimientos prácticos y científicos, y con base a ella y a las observaciones que las partes formulen a dicho trabajo, el Juez adoptará las decisiones pertinentes en cuanto a la misma, resolviendo las oposiciones y observaciones y condenando al pago de los saldos que a su juicio sean procedentes y de cuya determinación se oirá entonces apelación libremente, siguiéndose el juicio en las demás instancias a que diere lugar.

Esa segunda etapa, pues, es de conocimiento pleno, y si bien presenta particularidades en cuanto al objeto de lo controvertido y las defensas limitadas que pueden ejercerse por las partes, y con vista a las pruebas igualmente especiales que consagra la Ley, resuelve la petición definitiva sobre las cuentas y condena al pago de los eventuales saldos.

4. Las pruebas en el juicio especial ejecutivo de rendición de cuentas

Como también ha quedado palpable de lo expuesto, en dicho procedimiento, por tratarse del ejercicio de esas dos pretensiones de contenido diverso y dirigidas a un objeto mediato tan especial, las pruebas tienen sus particularidades.

En las que se presentan en la primera de las etapas, para dar curso a la negativa de presentar las cuentas o que enervan la pretensión de que se las deba presentar, la Ley exige, para darle ese efecto inmediato y suspender el proceso de cuentas, a fin de entrar en la segunda etapa, de que solo sean admisibles las pruebas escritas.

Obsérvese que el Legislador no dijo documentos, pues pueden ser libros, copias de actos contables, equivalentes a escritos (hasta podría pensarse en magnéticas que puedan ser reducidas a escritos: proceso mecanizado o computarizado de contabilidad).

Admitida la oposición, y abierta la segunda etapa, para que se dilucide ya en forma definitiva a cual período debe referirse la obligación de rendir las cuentas, y sobre cuales negocios diferentes de los esgrimidos por el actor, entonces, si se admiten cualesquiera de los medios probatorios previstos en el juicio ordinario.

Finalmente, de presentarse la cuenta y surgir observaciones no conciliables, la Ley también parece reducir las pruebas a exhibición e informes de terceros relacionadas con asuntos atinentes a las cuentas (Art. 687) y a una experticia especial (peritaje contable) para procurar ordenarlas indebidamente presentadas o conciliar las que presentadas tuvieren objeciones de alguna naturaleza (678 y 681 Cpc).

5. Modo de emplazamiento al juicio

Como también puede deducirse de lo expuesto y así lo determinan las normas aplicables, la orden de comparecer ante el Tribunal se realiza por una sola vez, en principio, a través de una intimación, en la cual ya se contempla que si se ejerciere la oposición y ella lo fuere con los fundamentos y pruebas requeridos por Ley, antes examinadas, las partes ya quedan además citadas y emplazadas a la segunda etapa del juicio para dar contestación a la demanda.

Lo dicho comporta, conforme jurisprudencia de nuestra Casación, que en estos casos no se trata de un emplazamiento ordinario, ni debe admitirse la intimación tácita²⁷ lo que ha pretendido justificarse en mayor seguridad y celeridad del proceso especial.

Nada se opone sí a que una vez lograda esa intimación originaria para trabar la litis luego se produzcan los llamados a juicios por suspensión u otras causas contempladas en la Ley por las vías ordinarias de citación establecidas en el Cpc.

6. Recursos

Por razones obvias y dados los efectos de los diferentes pronunciamientos del órgano judicial en las diferentes etapas y estadios de este procedimiento especial entenderemos que el régimen de los remedios ordinarios y extraordinarios aplicables resulta también atípico.

Así, contra la providencia que admite la demanda y ordena la presentación de las cuentas, por llenarse en el caso concreto los extremos de Ley, que no pone fin al juicio, y permite en todo caso el ejercicio de las defensas del demandado, solo se oye apelación en un solo efecto, aun cuando con ello pudiere pensarse que se pone fin a un primer estadio del litigio (Pronunciamiento sobre que hay lugar a presentar las cuentas).

En la que sigue a la anterior por la cual se desecha la oposición en tanto no se fundamentó en los documentos exigidos por la Ley, o la que si se lo hizo así, no la reputare el Juez fundada y que por igual resuelve la pretensión dirigida a que se repute existente la obligación y por tanto ha lugar a la presentación de las cuentas, también se la oye en un solo efecto, porque el juicio continuará en su nueva etapa.

En ya reiteradas oportunidades nuestra Corte Suprema en Sala de Casación ha venido negando el recurso extraordinario inmediato contra tales providencias, en tanto reputa no ponen fin al juicio (si bien con

²⁷ Reiterada jurisprudencia de nuestra Sala de Casación se ha venido produciendo después de la célebre ponencia del maestro Trejo Padilla (17-7-91) en la que distinguió los llamados a juicio en nuestro sistema, y el que no podía aceptarse la intimación tácita, por ser ello un llamado muy especial a juicio. Esta posición de la Corte ha sido criticada, y entendemos con razón, pues crea una dicotomía en los sistemas de citación en nuestro sistema, para muchos inexistente. *Vid.* Henríquez La Roche, *opus cit.* p. 118.

ello concluye esa etapa especial) y por cuanto no niega al recurrente continúe en el ejercicio de sus defensas en la nueva etapa del juicio²⁸.

Obsérvese como bien lo ha debido aclarar la jurisprudencia, en un fallo de Amparo Constitucional²⁹ que desechada la oposición y ordenada la presentación de la cuenta, no convierte ese mandato en un nuevo título ejecutivo que ampare embargo ejecutivo sobre bienes ni condena a pago alguno. Lo que simplemente se declara es que hay o no lugar a la presentación de la cuenta.

Finalmente, en cambio, la sentencia que resuelva sobre las observaciones a las cuentas e imponga la condena sobre la pretensión de esa índole, ordenando o no el pago de los saldos resultantes, si es una sentencia de fondo que pone fin al juicio y por tanto contra ella se oye recurso libremente y contra la que confirme o niegue en la Instancia superior por igual se concede Casación.

Creemos igual conveniente llamar la atención sobre la apelabilidad del auto de admisión de la demanda en vía ejecutiva, la cual estimamos procedente, en tanto ella no se ejerce contra un mero auto de trámite, como lo hemos venido sosteniendo desde tiempo atrás, sino contra ese pronunciamiento que casi es una condena, en el cual se intima al demandado a que cumpla con el objeto de la pretensión ejercida.

Es este un caso típico que puede ponerse de ejemplo general a que los autos de admisión en muchos y determinados casos, si debe y tiene que ser apelable, sin esperar a la sentencia definitiva ni tener que transcurrir todo el proceso para juzgar sobre su procedencia o improcedencia y ello se lo hace ahora con previsión expresa de la Ley³⁰.

En efecto, si en algún caso se justifica este recurso, a pesar de que se sostenga que el auto de admisión es de mero trámite, lo es en este tipo de juicios. En ellos, tal como lo hemos dicho el pronunciamiento del juez trasciende del mero rito, del solo ordenar “la admisión salvo su apreciación en la definitiva”, pues como lo hemos dejado demostrado

²⁸ CSJ SC 7-6-95, *Ramírez & Garay*, 2 T 1995, tomo 134, p.456 # 621-95, en tanto no cumple los requisitos contemplados en el Art. 312, ord 2 Cpc.

²⁹ Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil Area Metropolitana de Caracas, 18-8-94, *Ramírez y Garay*, T. 131, 3er Trini. 1994, p. 26.

³⁰ Al fin parece que tanto la Sala de Casación como los Tribunales Superiores han ido aceptando esa lógica y jurídica posición. Al respecto véase la sección de Jurisprudencia, *Revista de la Facultad de Derecho de la UCAB* No. 51, comentarios sobre fallos que así lo consagran.

antes, se trata de una especie de pre-condena, acorde a la pretensión ejercida, que pronuncia el Juez con vista a la especial prueba, ordenando intimar para que se demuestre el cumplimiento de la obligación que se denuncia como violada, esto es, se pronuncia - condicionalmente a favor de la existencia del derecho invocado, y ya sabemos que esa orden debe cumplirse, no obstante apelación.

III. PARTICULARIDADES DE LA ETAPA EJECUTIVA DEL JUICIO EJECUTIVO DE RENDICION DE CUENTAS

1. Modos de hacer valer la oposición

Como cabe colegir de los antecedentes comentarios, la oposición que formula el llamado a juicio tiene como objeto procurar enervar la orden de presentar las cuentas providenciada en el mismo auto de admisión, con un conocimiento sumario, pero que la Ley protege en razón del título con la cual se fundamenta la pretensión, de allí que la Ley sea tajante al establecer que el modo por excelencia con el cual puede atacarse la misma debe constar de prueba escrita y ser fundada.

Durante muchos años, apegados a la interpretación literal de la Ley, nuestro jueces sólo admitían como fundamento de la oposición, que o bien el demandado no estuviere obligado a cuentas, o que el período por el cual se le pedían no se correspondía realmente con el demandado en la pretensión o, finalmente, que no era el negocio sobre el cual se pretendía derivar aquella, al que se aludía en el libelo, que por supuesto son franca defensa en contra de los fundamentos mismos de la pretensión, y que obviamente, por destruir la presunción que dimanaba del título con el cual se las fundaba, enervaban la de la existencia misma de la obligación de rendir las cuentas.

Tal posición fue modificada a posteriori ante el hecho evidente de que por igual daban pie a ello una serie de cuestionamientos más que atacaban bien la acción deducida, bien sus fundamentos, no necesariamente con base a la contraprueba de lo que constituía el motivo fundamental de la acción o contradecían los que dimanaban del título acompañado. Nuestra propia Casación cayó en cuenta de lo antes dicho y declaró expresamente que las defensas enumeradas en la Ley no eran únicas, ni la determinación de las mismas era taxativa, posición con la

cual se atentaba contra el derecho de defensa y por ello sostuvo que se admitía toda otra previa o de fondo siempre que se sustentara en prueba auténtica³¹.

Somos del parecer que por igual afectan lo discutido en su esencia, la falta de cualidad pasiva, defectos del título, litis pendencia, prescripción, extinción por existencia de finiquito, aceptación expresa o tácita de la cuenta, etc.

Como en otros casos de los juicios ejecutivos, nada dice la Ley de cómo debe formularse la oposición, lo cual ha generado varias interpretaciones que van desde la más simple, conforme la que basta con alegar la simple, oposición y acompañar la prueba escrita sobre el hecho que contradice las afirmaciones del libelo, reservándose que la explicación y fundamentación de la oposición pueda hacerse en la contestación de la demanda propiamente, o la más conservadora, conforme a la que deben exponerse los motivos de la oposición, sus fundamentos y cualquier otro hecho que fortalezca la contradicción, a reserva de que nuevamente en la contestación se formalicen otros, se amplíen y ratifiquen los invocados.

La norma concede amplio término al demandado para hacer valer la oposición, esto es, el mismo concedido para que en su lugar se presente la cuenta (20 días de despacho), el cual en todo caso debe dejarse transcurrir íntegramente, por razones de seguridad procesal, y dentro de los cinco días adicionales que transcurran luego del decurso íntegro de aquél, se procederá a recibir la contestación de la demanda propiamente en los términos que exige el Cpc para el juicio ordinario.

Analizadas por el Juez las causas de la oposición y la prueba con la cual se hubiere sustentado, la declarará pertinente, suspendiéndose entonces el juicio especial de cuentas y dará curso al término probatorio para luego resolver sobre dichas defensas, declarando procedente o improcedente la exigencia de presentar las cuentas.

³¹ CSJSCC de 06-12-60, *Ramírez y Garay*, tomo I, pp. 170 ss, ratificada por la del 29-3-89, *opus cit.* T. 107 pp 353, 364, y por igual repetidas en la Jurisprudencia de Tribunales Superiores, como lo son las difundidas en la misma citada obra, del 29-6-94, en el tomo 130 p. 49 ss y en el T. 124, p. 31, del 30-6-93, con la advertencia de que se alude en la primera a prueba auténtica por estar referido al viejo Cpc, que así lo estatúa en sus artículos 654 y 656 hoy sustituidos por el 673 Cpc.

Dentro de ese lapso puede ocurrir también que el demandado opte por no hacer valer las defensas anunciada o simplemente no de contestación a la demanda.

También puede ocurrir que, desechada como hubiere, sido la oposición, o firme la providencia que ordena la rendición de cuentas el demandado no presente las cuentas ordenadas por el Juez tempestivamente, lo que por igual, a nuestro entender, lo que hace es dar lugar al nacimiento de una presunción *iuris tantum* de que efectivamente la obligación si existe, de que se refiere a los períodos por los cuales se la demanda y se relaciona con él o los negocios realizados, y debe declararse procedente se abra el lapso de pruebas para definir los saldos que deberán pagarse por el demandado al actor.

El ejercicio de la defensa no modifica la carga de la prueba, pues toca siempre al demandado demostrar la falta de veracidad en los hechos o en el derecho que fundamentan la pretensión.

2. SOBRE QUE DEBEN VERSAR LAS PRUEBAS EN DICHA ETAPA

a) Desechada la oposición que se hubiere formulado conforme lo prevé el Art. 675 o en el caso de que no se presentaren las cuentas en el plazo indicado en dicha norma, si la apelación resultare desechada, el fallo no puede dictarse sin más, siendo menester dar curso al período probatorio contemplado en la Ley (677), no puede dictarse el fallo a que se contrae la norma del mismo citado artículo.

b) Las pruebas de esta incidencia no tienen limitación legal, pueden utilizarse cualquiera de los medios probatorios contemplados en el ordenamiento ordinario, y no necesariamente las escritas.

Con ellos se procurará demostrar al juez los fundamentos y procedencia, sean de las defensas esgrimidas, sean de las cuestiones previas que enerven el ejercicio de la acción y pueden atacar por supuesto la procedencia de la pretensión, los presupuestos de la acción o cualquier otra defensa atinente a desvirtuar los fundamentos de la pretensión ejercida, inclusive para desvirtuar la existencia de la obligación de cuentas, que no pudo quedar desvirtuada o que quedó desechada por el Juez al no haberse acompañado el medio probatorio exigido en la Ley.

3. Sobre que deben versar los recursos y sus efectos

A este respecto, por lo que se refiere al contenido del recurso contra la providencia del Juez ordenando rendir la cuenta, Henríquez La Roche sostiene con todo fundamento que la revisión de la alzada solo puede referirse en la existencia o no de la obligación de rendir la cuenta, en tanto que lo referente a haberlas rendido ya, corresponder la exigida a un período diferente a aquel que se señala en la petición libelar o a negocios diferentes, son cuestiones que deben debatirse con ocasión de la oposición y deben estar apoyados en la prueba escrita que alude el artículo 673, por tanto no deben revisarse en la alzada en virtud del efecto devolutivo con el cual concede la Ley el recurso³².

En cuanto a la segunda apelación especial que contempla la Ley en el artículo 675, referente a la providencia que desecha la oposición por no acompañarse prueba escrita o no encontrar fundada el Juez la que se ejerciere, y la que por igual se ordena oír en un solo efecto, atiene y confiere potestad a la alzada para revisar si son o no valederos los motivos de la oposición, indicados en la norma enunciativamente, como lo hemos dejado dicho.

Esta apelación destaca nuevamente Henríquez La Roche, se oye en el efecto diferido, pues aunque no se suspende el curso del término de los días fijados para presentar la cuenta, sí se suspende o difiere el lapso de promoción de pruebas (677) a la espera del resultado de la interlocutoria de segunda instancia³³.

OTRAS OBSERVACIONES PERTINENTES

No considero prudente terminar estos breves comentarios al juicio ejecutivo de cuentas sin llamar la atención de Uds. de ciertas situaciones irregulares que pueden presentarse con ocasión del mismo, a las cuales solo me referiré brevemente, pues propiamente no son cuestiones de índole procesal, pero que definitivamente inciden en la solución de tales procesos, y que entre otras son las siguientes:

1. La doctrina ha discutido arduamente sobre si ciertas formalidades con las cuales se informan los resultados de una gestión, constitu-

³² *Opus cit.*, P. 206.

³³ *Opus cit.*, P. 206.

yen o no el modo correcto de presentar las cuentas quien viene obligado a ello. Por ejemplo: Los balances y estados financieros que se entregan por los administradores a la asamblea de socios y a los Comisarios³⁴.

En esta materia no parece existir acuerdo unánime, para algunos, aquellos son simples informes que no cuentas, luego, obviamente, aún aprobada la gestión con base a dichos instrumentos, para quienes así opinan, siempre ‘es factible exigir la debida presentación de las cuentas.

Entre quienes objetan esa postura, se esgrime que ello no es posible, en tanto que la sociedad tiene mecanismos *ad hoc* para revisar y escudriñar como y de qué manera se formaron esos informes y cuentas (Pe. El Comisario, en el caso de las sociedades anónimas se supone tiene esa labor)³⁵ y por lo tanto, si se aprobaren aquéllas, se supone que se otorgó conformidad con esa cuenta, por ese período y para los negocios realizados durante el mismo.

2. Si bien lo anterior pudiere ser aceptable en el caso del funcionamiento ordinario de la sociedad, y entendiendo que la legitimada pasiva para aceptar y recibir esa cuenta lo es la Asamblea³⁶, no ocurre ello así cuando se trata de que la sociedad entra en disolución y se ordena o procede la Liquidación, en tanto que en tales supuestos, al menos a texto literal de nuestra normativa societaria, cesan los poderes del órgano societario, ya no prevalece el interés social sobre el individual, sino que los entonces socios, ahora condueños del patrimonio en liquidación, tienen derecho a recibir cuentas del liquidador³⁷ (o de los administradores entonces convertidos en tales) y a quienes no puede presentárseles como “cuenta” el simple balance y estados financieros, sino todo aquello que la Ley regula y determina como modo adecuado de presentarla y consignarla (Art. 676 Cpc).

En fin, como puede observarse son múltiples los supuestos particulares que caben analizarse con ocasión del juicio de cuentas, ordinario y el especial ejecutivo, y estoy seguro, que con lo expuesto, queda sembrado el interés para que otros muchos escudriñen sobre tales aspectos y ayuden a desentramar todo lo interesante de estos casos.

³⁴ Art. 265 y 304 “Código de Comercio” (Cco).

³⁵ Art. 304, 309 Cco.

³⁶ Art 310 Cco.

³⁷ Art. 350 Cco, ords. 3 y 8.

CONCLUSIÓN

Para nosotros, como tradicionalmente se lo ha venido haciendo, en los casos y bajo los requisitos que establece la normativa vigente, se justifica que se dé el trato especial del Juicio Ejecutivo de Cuentas, a la garantía adjetiva para exigir el cumplimiento de ese deber de rendir cuentas.

Consideramos que la sola demostración de la existencia de las relaciones contractuales, cuasi contractuales o legales de los cuales derive ciertamente el deber de rendir las cuentas, permite al Legislador facultar al juez para que sumariamente resuelva que se cumpla el mandato sustantivo de que deben ser presentadas las cuentas, salvo que de modo escrito, por igual quede evidenciado el haber dejado cumplido dicho deber, el que las reclamadas no se corresponden con el período que se señala fue realizada la gestión, o que no son esos los negocios en los cuales se gestionó el patrimonio.

Si bien debe admitirse que la redacción de la norma en cuanto a las defensas ejercibles, no es la más adecuada, la jurisprudencia ha venido haciendo de adecuado instrumento para una mejor interpretación de la Ley, y ya hoy no queda duda en cuanto que el uso de los medios defensivos no está solo restringidos a los hechos referidos en la norma.

La forma como se regula el proceso especial, en sus dos etapas tradicionales, no resulta inadecuada o injusta, y consideramos, permite deducir la misma causa en dos momentos diferentes, con objeto y efectos distintos, en razón de lo que resulta objeto de la pretensión en cada una de ellas.

Esperamos que nuestros humildes razonamientos y observaciones sobre esta materia, puedan servir en algo a nuestros pacientes oyentes y le sirvan de instrumento para la mejor comprensión de ese especial tipo de juicio ejecutivo en nuestro sistema procesal y de todo cuanto él entraña.

Cierro mi intervención, felicitando una vez más a los colegas de Oriente, en especial al Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui y en particular a su Instituto de Investigaciones, quienes con la ya reiterada celebración de eventos como éste y la continua promoción de conferencias sobre temas de actualidad, ponen de manifiesto su interés

por conocer las últimas novedades en materia procesal, impulsan el estudio de las nuevas instituciones y sus regulaciones y, en fin, propician el mejoramiento de los integrantes de nuestro gremio, cuestiones estas tan necesarias dentro de una Venezuela en crisis y a punto de iniciar tránsito en el nuevo Siglo.